

Pedimento del O. fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

El Fiscal interino dice: que en el Juzgado de 1ª instancia del departamento de Soconusco, jurisdicción de Chiapas, se instruyó causa, por sospechas de conspiración, contra Manuel Marioquán y socios, la que fallada en sentido favorable á los acusados por el Juez de Distrito de San Cristóbal las Casas, y confirmada por el Tribunal de Circuito de Yucatan, la sentencia de dicho Juzgado ha sido remitida á esta Corte para su revision. Al efecto, el que suscribe la ha examinado, y no encontrando ni en el procedimiento, ni en las sentencias de 1ª y 2ª instancia, que se halla faltado á la ley, pide á la Sala, que al resolverlo así, se su-va declarar que no hay méritos para exigir la responsabilidad, mandando archivar al Toca y reunir las actuaciones originales al Tribunal de su procedencia.

México, Febrero 20 de 1875.—*Lozano.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 26 de 1875.

Por revisado, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José M. Iglesias.—M. Arza.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—Enrique Lanta.*

Son copias. México, Marzo 19 de 1875.—*Enrique Lanta.*

CRIMINAL.

Causa instruída ante el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco, contra los comerciantes, D. Miguel Alvarez del Castillo, D. Refugio Alvarez Testado y D. José M. Montero, por fabricacion y emision de moneda falsa.

Pedimento del O. Promotor fiscal del Juzgado de Distrito.

C. Juez.

El Promotor fiscal dice: Habiendo concluido el sumario de esta causa, instruída contra los Sres. D. Miguel Alvarez del Castillo, D. Refugio Alvarez Testado y D. José M. Montero, por la emision de fichas ó monedas particulares, destinadas á facilitar su comercio al menudito, y despues de formulados los cargos y las defensas respectivas con relacion á los procesados, toca la vez al susrito de emitir su parecer.

«Comenzará el Promotor por rectificar los términos que el C. Juez 2º suplente usó al hacer la declaratoria de bien puros contra los procesados, asentando que habian usurpado la autoridad pública, cuando debió haber dicho con mas precision y porer la realidad de los hechos, que habian usurpado ó ejercido una de las atribuciones de dicha autoridad; en seguida recordará el que habla que en ninguno de sus dictámenes anteriores, ha sostenido que los inculcados hubieran falsificado la moneda legal, que fueran monederos falsos, como equivocadamente lo asegura, para combatirlo, el defensor de D. José M. Montero; y por último, hará presente que en ninguno de sus mencionados dictámenes ha tenido ocasion de referirse al hecho ejecutado por el repetido Montero; que, como se verá despues, considera el Promotor de muy diferente manera que los que han servido de base para proceder contra los Sres. Alvarez del Castillo y Alvarez Testado, bastando todo lo

dicho para contestar la defensa del Sr. D. Trinidad Anaya.

«Tratando ya de lo principal de esta causa, se ocupará el suscrito, primeramente, del delito atribuido á los Sres. Alvarez, por la emission de fichas ó monedas particulares que hicieron, como está plenamente probado por el proceso.

«El promotor tiene dicho antes de ahora, que tales actos están prohibidos y penados por el art. 758 del Código penal, porque constituyen la usurpacion de funciones públicas que la frac. 23, art. 72 de nuestra Constitución Fundamental, comete exclusivamente al S. Congreso de la Union, y por lo mismo, dando por reproducidas aquí sus apreciaciones anteriores, solo se ocupará de examinar, según el resultado del proceso, si los encausados son criminales en el estricto sentido de la palabra; y debe aplicárseles la pena señalada por la ley.

«Toda infraccion á una ley penal se presume ejecutada con dolo, y constituye por lo tanto un delito; pero esa presuncion legal no es de tal naturaleza que no admita prueba en contrario, según los buenos principios de derecho sancionados por el art. 99 del Código penal; así es que lo que algunas veces se presenta con todos los caracteres de delito, por ser un acto reprobado y castigado por el legislador, aunque tiene que reprobarse tambien necesariamente por el encargado de aplicar la ley, no debe castigarse cuando aparezca del proceso evidentemente demostrada la buena fé, la falta de dolo, la inocencia en fin, del que obró contra la ley, desvaneciéndose por lo mismo, su presunta criminalidad.

«El que habla, tiene la satisfaccion de reconocer que los Sres. D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez Testado se encuentran en la circunstancia excepcional antes mencionada, de haber infringido una ley penal, y de no ser criminales sin embargo, porque su buena fé al ejecutar el hecho prohibido, no se funda en la ignorancia de la ley, en erreria injusta, en supo-

ner que era lícito violarla, ni en los demás casos que, según el art. 109 del Código citado, no excluyen la presuncion de delito intencional, sino en el uso generalmente establecido, y desde tiempos muy atrás de emitir fichas ó monedas particulares para el comercio al menudeo, en la tolerancia de las autoridades, en la inteligencia fundada en lo anterior, de que la ley no les comprendia, en no haberse propuesto con la emission que hicieron, lucro alguno, ni perjudicar á nadie, sino solamente facilitar los cambios que el pueblo tiene hábito inmemorial de hacer sobre la infima moneda legal y para evitar la confusion que en la actualidad se resiente por la mezcla de la moneda antigua de cobre, con la decimal nuevamente introducida, y en otras varias consideraciones que después de las referidas sería inútil cesarpar.

«Por lo que toca al otro procesado, D. José María Montero, que ha partido los octavos de real legalmente acuñados y los ha marcado unas letras para conseguir medios tracos y facilitar sus cambios, no ha hecho ni ha emitido monedas particulares como los Sres. Alvarez, sino que ha falsificado la moneda legítima, la ha alterado; pero como por la alteracion nada ha disminuido de su valor el octavo de real, en circunstancias, requiriendo necesariamente para imponer castigo, pone al ejecutor fuera del art. 871 del Código Penal y hace que no pueda reputársele como delincuente.

«Por lo expuesto, el Promotor concluye pidiendo:

1º Que se absuelva á D. José María Montero, por no estar prohibido el acto que ha ejecutado de partir en dos los octavos de real legalmente acuñados.

2º Que se absuelva igualmente á los Sres. D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez Testado, por haber infringido sin dolo el art. 758 del Código Penal, al usurpar una de las funciones de la autoridad pública con la emission de fichas ó monedas particulares que hicieron.

3º Que se mande recoger é inutilizar las fichas relacionadas, destinándose su metal para los usos de la Casa de Moneda de esta Ciudad, de acuerdo con lo prevenido por el art. 106 del Código Penal y se prevenga á los expresados Alvarez, amorticen á los tenedores con monedas legítimas el valor convencional de aquellas fichas.

4º Y por último, que se amoneste á los repetidos Alvarez del Castillo y Alvarez Tostado, se abstengan en lo sucesivo, de acuñar y emitir monedas particulares y se les advierta las penas en que incurrirán si lo ejecutan.

Guadalajara, Diciembre 24 de 1873.—

A. Camarena

Son copias. Guadalajara, Agosto 28 de 1874.—A. Camarena.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Guadalajara, Febrero 22 de 1874.

Vistos: El 27 de Mayo próximo pasado, el Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, comunicó al Juez de Distrito, que los Sres. José M. Montero de esta ciudad, casado, mayor de veinticinco años, comerciante, Refugio Alvarez Tostado, de esta vecindad, soltero, mayor de treinta años, comerciante, y Miguel Alvarez del Castillo, de esta misma vecindad, comerciante, y de cuarenta y un años de edad, hacian la emision de fichas ó monedas particulares de cobre, las cuales circulaban en el comercio de sus respectivas tiendas.

El O. Juez propietario de Distrito, resolvió, que no se consideraba competente para conocer en este negocio, por no haber falsificacion de moneda, porque las fichas ó monedas particulares puestas en circulacion, son monedas falsas. Esta resolucion fué comunicada por el Ayuntamiento, al Supremo Gobierno del Estado, quien la remitió al Ministerio de Fomento para que dictara las providencias que eran de su resorte, á fin de impedir la circulacion de esa moneda.

El Ministerio antes citado, en comunicacion de fecha 12 de Julio último, determinó: que el Juzgado de Distrito, debia proceder contra las personas que tal emision hacen, tanto porque la fabricacion de monedas particulares es abusiva, como porque los fabricantes de ella usurpan facultades del poder público. El Juez propietario de Distrito, con motivo de lo que habia resuelto antes, se consideró ya impedido para conocer en esta causa. El O. Juez 2º suplente declaró legal esa excusa y se abocó el conocimiento de este proceso, por haberse excusado tambien el primer suplente, por ser fiscal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el presente Juez conoce de este negocio, por haberlo acordado así la Suprema Corte de Justicia, en su telegrama de fecha 10 de Noviembre último.

Se organizó este proceso, se dió fé de las monedas particulares, emitidas en el comercio de los acusados, se les tomó su declaracion preparatoria y con fecha 15 de Agosto próximo pasado, se motivó el auto de prision, contra Alvarez Tostado y Alvarez del Castillo, quienes apelaron de esa providencia, que el Superior Tribunal de Circuito confirmó el dia 22 de Setiembre último. Reducido á prision D. José M. Montero el 27 de Agosto y haciéndose acumulacion de las diligencias practicadas con motivo de la alteracion que este hizo á la moneda de cobre legítima, tomada su inquisitiva en esa misma fecha, se lo declaró bien preso y á los tres acusados se les encarceló bajo fianza, se les hicieron los cargos correspondientes á cada uno y contestaron, que hacian esa emision de monedas particulares, porque tenian la creencia de que ninguna ley lo prohibia, siguiendo en esto una costumbre muy antigua, como tambien para facilitar á la clase menesterosa el comercio al riguroso menudeo; y no haber fracciones pequeñas para hacerlo.

La emision de esas monedas (las de la fé) en los comercios de Alvarez Tostado y Alvarez del Castillo, y la alteracion de la

legítima lucha por Montero, está justificada y sus defensores los excusan con las mismas razones que los acusados han manifestado en sus descargos.

El C. Promotor en su respuesta de 23 de Diciembre próximo pasado asienta que están plenamente justificados los hechos de que se acusan á los Alvarez y Montero y que tales actos están prohibidos y penados por el art. 758 del Código Penal, y ellos constituyen la usurpacion de las funciones que la fraccion 23 art. 72 de la Constitucion General de la República, comete exclusivamente al Congreso de la Union.

Asienta tambien, que aunque los acusados han infringido una ley final, sin embargo, esa infraccion constituye propiamente un delito aplicando al presente caso los buenos principios de derecho, sancionados por el art. 99 del Código citado, supuesto que en ellos hubo buena fé al ejecutar el hecho prohibido, y por otras varias consideraciones que aprecia como justas y legales: observa además, respecto de Montero, que aunque ha alterado la moneda de cobre legítima, ésta no ha disminuido en su valor; que esa circunstancia lo pone fuera de lo dispuesto en el art. 671 del Código, y termina diciendo que se absuelva á los acusados, por no haber habido dolo al hacer la emision y alteracion de esas monedas, las cuales se recogieron para los efectos del artículo 106 del Código, y se les prevenga no vuelvan á hacer esa emision en lo sucesivo.

Este Juzgado, Considerando: 1º Que la emision de monedas particulares hecha por Alvarez del Castillo, Alvarez Testado, y alteracion de moneda de cobre legítima, hecha por Montero, está plenamente justificada.

2º Que la facultad de establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, determinar el valor de ella y de adoptar un sistema general de pesos y medidas, corresponde al Congreso de la Union, conforme á la fraccion 23, art. 72 de la Constitucion general de la República.

3º Que la emision de moneda particular en los giros mercantiles, aun cuando se haga convencionalmente con los consumidores, á mas de entrañar una conecion moral que se le hace al público, pues se le obliga muchas veces á tomar efectos de mala calidad y á precios alterados, contiene inválida la infraccion del precepto constitucional, usurpando facultades propias del poder público, por pequeña que sea la cantidad de moneda que se ponga en circulacion, é ínfimo el valor que ella represente.

4º Que la ignorancia de la existencia de una ley penal no excusa al que la infringe.

5º Que en el presente caso, los artículos 758 y 671 del Código penal, no tienen aplicacion, porque los acusados no hicieron la emision de monedas particulares y alteracion de la moneda legítima de cobre dolosamente, o reprobacion necesaria en toda accion contra una ley penal, para calificarla como delito.

6º Por último, que si la moneda con que se hace el comercio al riguroso menudeo, está escasa, bien pueden los comerciantes solicitar su acuñacion de quien corresponda.

Por tales consideraciones, este Juzgado, con apoyo de los arts. 99 y 106 del Código penal, y de la ley 26, tit. 19, part. 73, y de conformidad con lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal, definitivamente juzgando, falla con las proposiciones siguientes:

1ª Se absuelve á D. Miguel Alvarez del Castillo y á D. Rufino Alvarez Testado, del delito de emision de monedas de cobre particulares, y á D. José María Montero, del delito de alteracion de moneda de cobre legítima, y del de usurpacion de facultades del poder público.

2ª Se les obliga á no emitir en lo sucesivo esa clase de moneda, y amerciar y recoger la que tienen en circulacion, entregándola al Director de la Casa de moneda, para los efectos del art. 106 del Código penal, y se les obliga tambien á no hacer al-

teracion alguna á la moneda de cobre legítima.

3º Notifíquese esta sentencia, y remítase esta causa al Superior Tribunal de Circuito para su revision.

El Juez tercero suplente de Distrito lo sentenció y firmó.—*T. Bonilla.—G. Y. Gallegos.*

Es copia. Guadalajara, Agosto 27 de 1874.—*G. Y. Gallegos.*

Pedimento del C. Promotor Fiscal del Tribunal de Circuito.

Sr. Magistrado:

«El Promotor fiscal se ha impuesto de las últimas diligencias practicadas en esta causa, y apareciendo de ellas: que D. Miguel Alvarez del Castillo no ha entregado al Juzgado de Distrito las fichas que puso en circulacion, ni parte alguna de ellas, porque asegura no haberlas podido recoger; que entre los útiles de acuñacion que presentó, faltan segun el juicio de peritos, los relativos al cordon que tienen las fichas mencionadas; que, segun el juicio de los mismos peritos, no fueron acuñadas en los mismos troques las fichas, grande y chica, agregadas á la causa en la feja 82, por orden de ese Superior Tribunal, sino que únicamente las chicas pudieron acuñarse en los troques entregados por el Sr. Alvarez del Castillo; pero no las grandes, para las que se necesitan útiles de mayor proporcion; que no hay datos de que el referido Alvarez haya emitido la ficha grande ni otras mas de ese tamaño, asegurándolo así el procesado y confirmando su dicho el perito D. Oulso Camacho, que por orden de aquel hizo la acuñacion de las fichas chicas; y que considera la grande como falsa, con la que se proemó hasta aquellas; y que sentado lo anterior, no hay una emision de fichas diferente de la que ha sido objeto del proceso, por lo que pudiera atribuirse al referido Alvarez del Castillo, nueva y distinta

ROMO VII—PARTE II.

responsabilidad: apareciendo de las diligencias practicadas, se repite, lo que queda expuesto.

«El Promotor concluye:

1º Dando nuevamente por reproducido su dictámen de 24 de Diciembre último, á fs. de la 60 vta. á la 63.

2º Solicitando que se dicten las medidas de apremio, convenientes para obligar á D. Miguel Alvarez del Castillo á que recoja y entregue las fichas que puso en circulacion, no siendo creíble que no haya podido amortizar ni una parte de ellas.

3º Y por último, pidiendo que se prevenga al expresado Alvarez, entregue el instrumento ó instrumentos que sirvieron para acordonar las fichas, y se dicten las medidas conducentes para obligarlo á ello, si espontáneamente no lo verifica.

Guadalajara, Julio 19 de 1874.—*A. Camarena.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Guadalajara, Agosto 3 de 1874.

Vistos: D. Miguel Alvarez del Castillo, casado, comerciante y de cuarenta y un años de edad; D. Refugio Alvarez, mayor de treinta años, soltero, y D. José M. Montero, casado, mayor de veintiun años, comerciante, todos de esta vecindad, han sido procesados en el juzgado de este Distrito, por emision de moneda de cobre con sello particular; y en la causa aparecen las siguientes constancias:

Una comunicacion del Ayuntamiento de esta ciudad, dirigida al Juez de Distrito, acompañándole seis tipos diferentes de moneda particular, que circulaba en los mercados de esta poblacion, emitida por D. José M. Montero, D. Refugio Alvarez, D. Prudencio Avilés y D. Miguel Alvarez del Castillo; cuyo hecho le denunciaba para que procediese en contra de esas personas.

La respuesta de esa autoridad, devolviendo las seis piezas ó monedas de cobre, de

forma irregular, y manifestando que no procedía á practicar la averiguación criminal correspondiente, por no ser competente para esto, en razón de que conforme á las definiciones que de la palabra moneda dan, Domínguez en su Diccionario de la lengua y Escriche en el de Legislación, no pueden reputarse por tal esas piezas, y además no hay ninguna ley desde las antiguas de la Legislación Española, hasta el Código penal vigente, que reputen como moneda esas piezas y prohíban por lo tanto su fabricación, la cual desde tiempo inmemorial, casi autorizada y permitida por la autoridad pública, se había hecho por los particulares: citando en apoyo de su opinión la Real Cédula de Carlos III, en que interpellaba á las autoridades y empleados superiores de la nueva España, sobre la conveniencia de prohibir el uso de esas monedas particulares, sustituyéndolas con otras acuñadas por la autoridad pública.

Una comunicación del Ministerio de Fomento, dirigida al expresado Juez de Distrito y al Gobierno de este Estado, motivada por el aviso que dicho Gobierno dió de la resistencia que presentaba el Juez para ocuparse de este negocio, en la cual manifiesta, que no solo hay delito de la competencia de los Tribunales Federales; sino un doble delito, que consiste en la falsificación de moneda y usurpación de atribuciones propias de la autoridad pública.

La respuesta del Juez de Distrito insistiendo en su opinión, por creer que tanto el Gobierno de este Estado como el Ministerio de Fomento se habían formado juicio erróneo de este negocio, suponiendo que se trataba de pesos de sobre, y no de pequeñas monedas con valor de medio tlaco, emitidas por algunos comerciantes para favorecer el tráfico de riguroso menudeo, cuyas piezas, algunos las usan hasta de jabón, por lo que ni proceden esas personas de mala fé, ni al erario le viene daño de la emisión de esas monedas, y en confirmación de su juicio, cita las doctrinas y noticia históri-

cas que aparecen en el Diccionario de Legislación del Sr. Escriche en la palabra «moneda.»

Una comunicación del Gobierno del Estado, dirigida á este Superior Tribunal, transcribiéndole la enunciada del Ministerio de Fomento, la cual se pasó al C. Promotor fiscal, para que pidiera en favor de la hacienda pública lo que fuese de justicia; y examinada por ese funcionario, encontró que la emisión de esa especie de monedas, importaba el delito de usurpación de atribuciones propias de la autoridad pública, penado por el art. 758 del Código criminal, como lo había manifestado ya el propio Juzgado de Distrito en un negocio de la propia naturaleza, que ante él se sigue contra D. Joaquín Castaños, y concluyó sorprendiéndose de que el Juzgado hubiera declarado su incompetencia, sin oír previamente su voz; y pidiendo se pasara dicha comunicación al Juez de Distrito, para que procediera á practicar la correspondiente averiguación y resolver en justicia.

El auto de este Tribunal, dictado de conformidad con el pedimento de su fiscal.

El nuevo pedimento de ese funcionario extendido con presencia de los demás antecedentes que obraban en el Juzgado de Distrito, reproduciendo su respuesta anterior:

La excusa del Juez propietario de Distrito, por haber externado su opinión en las comunicaciones que dirigió al Ministerio de Fomento, al Gobierno de este Estado y al Ayuntamiento de esta Ciudad, mandando pasar el expediente al primer suplente para que hiciera la calificación respectiva, el cual sin hacerla se excusó á su vez de conocer de este negocio por ser fiscal del Supremo Tribunal de Justicia de este Estado y sometía su excusa á la calificación del segundo suplente.

La calificación que este hizo de la excusa del primero, estimándola legal y avocándose el conocimiento del proceso, del cual conoció hasta que en 15 de Noviembre úl-

timo, en que habiendo sido suspenso en el ejercicio de la judicatura, por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, lo pasó para su secuela y conclusion al C. Juez tercer suplente.

La comunicacion del Juzgado de Distrito, al Ayuntamiento de esta Ciudad, pidiendo le remitiera las monedas que le habia devuelto el Juez propietario, á fin de proceder á practicar la averiguacion correspondiente.

La respuesta del Ayuntamiento manifestando, que esas monedas las habia remitido al Gobierno del Estado; pero que mandaba otras cuatro de las que circulaban en los mercados de la ciudad.

La comunicacion dirigida por el mismo Juzgado al Gobierno del Estado, pidiéndole informe sobre la clase de pesos de que le habló al Ministerio de Fomento en su comunicacion relativa; y la respuesta de dicho Gobierno manifestando, que no le habia hablado al Ministerio de Fomento, de pesos, y remitiendo dos monedas representando cada una el valor de medio tlaco:

La fé judicial que se dió de esas monedas, siendo una de cobre de forma circular, conteniendo en el anverso el nombre de Miguel Alvarez y C^a y la fecha 1873, y por el reverso una colmena y otros signos: otra tambien circular marcada en el anverso con estas iniciales R. A. y por el reverso una cifra ó letrero imperceptible; y otras dos semicirculares conteniendo, una esta marca P. A. y la otra marcada con estas letras P. D. N.^o

La detencion de D. Miguel Alvarez del Castillo y de D. Refugio Alvarez y su excarcelacion bajo de fianza:

Sus inquisitivas, en las que el primero dice, que no sabia que alguno hubiera emitido monedas, porque esta és atribucion exclusiva del Gobierno: que él habia emitido lo que se llaman fichas, y presentó un ejemplar de ellas, cuya emision hizo en 3 de Mayo por valor de quince pesos, divididos en piezas de á medio tlaco: que obró así porque no hay ley ni orden de policía

que se lo prohiba, y por la suma necesidad que se siente de moneda pequeña: que sabe que todas las personas que tienen comercio al pequeño menudeo emiten esa especie de fichas, y para justificar su acerto presentó algunas de diversas materias, de madera, de cobre, de laton y de plomo, con distintas marcas, manifestando, que ignoraba á quienes pertenecian; y el segundo declaró, que muchas personas, aunque ignoraba quienes eran, emitian esas fichas: que él mismo habia emitido unas con las iniciales R. A., porque no hay ley que se lo prohiba, y por la escasez que se siente de monedas de pequeño valor.

El auto motivado de prision pronunciado contra esas dos personas:

La apelacion que de él interpusieron y les fué admitida en ambos efectos:

El auto en que apesar de estar suspensa la jurisdiccion del juzgado en este negocio, por el sentido en que se admitió la apelacion, se mandó que se compulsc testimonio del oficio del Ayuntamiento para continuar la averiguacion:

La presentacion de D. José María Montero, su detencion y su inquisitiva, en la que declaró, que habia partido por la mitad cuatro ó cinco pesos de tlacos, poniéndole á cada pieza estas iniciales P. D. N., que quiere decir Paso del Norte, que es el nombre de su tienda, las cuales equivalen á valores al portador, y que obró así por la necesidad de proporcionarse cambio.

El auto motivado de prision pronunciado contra este último y su excarcelacion bajo de fianza.

La expresion de agravios de D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez, bajo la direccion de su patrono el Sr. Lic. D. José María Verea, contra el auto de prision; exponiendo, que habian acuñado esas medallas ó fichas para el uso exclusivo de sus comercios, con objeto de favorecer á la clase menesterosa; que al obrar así, habian seguido una costumbre lícita, permitida por las leyes; pues el art. 758 del

Código Penal no es aplicable á ese caso, ni entro dicho artículo y la frac. 23 del 72 de la Constitución Federal, hay el enfuce y relacion que se quiere encontrar, pero que ya habian recogido esas medallas ó fichas.

La respuesta del C. Promotor fiscal, en la que expuso: que estaba probada la material existencia del cuerpo del delito: que los acusados habian confesado ser sus autores: que ese hecho estaba prohibido por la frac. 23 del art. 72 de la Constitución Federal y penado por el 758 del Código Criminal: que no estaba justificado que fuera uso inveterado y general, emitir los particulares, pequeñas monedas, y aun estándolo, no constituiría costumbre, porque no habia habido decisiones judiciales que la sancionaran, contrariando los arts 127 y 128 de la Constitución Federal.

La confirmacion del auto de prision.

La declaracion de D. Jesus Gallo, Admitrador de los mercados de esta Ciudad, en la cual dice: D. José María Montero, D. Refugio Alvarez, D. Miguel Alvarez del Castillo y un señor apellidado Avilés, cuyo nombre ignoraba, eran quienes habian emitido las monedas, y que una vez se le presentó una muger en la plaza de Venegas, mostrándole una porcion de monedas, y se le quejó, que no se las querian recibir en los comercios en donde se las habian dado.

El auto en que se mandó acumular á la presente, la averiguacion comenzada contra D. José María Montero.

La confesion con cargos de los tres acusados, cuyas respuestas están en perfecta consonancia con las que dieron en sus inquisitivas.

La defensa de D. José María Montero, hecha por el entendido joven D. Trinidad Anaya, concretada á amplificar los razonamientos del C. Juez de Distrito, que aparecen en sus comunicaciones, para motivar su incompetencia de conocer en este negocio, y los del defensor de los otros acusados

de que hizo uso para combatir el auto de prision.

El alegato de este último, reproduciendo brevemente el de 11 de Setiembre.

La respuesta del C. Promotor fiscal, en la cual, aunque volvió á estimar como delito la emision de monedas particulares; pero no encontrando malicia en la comision de esos hechos, autorizados por la costumbre, pidió que se les absolviera del juicio, comprendiendo en la absolucion á D. José María Montero, por que en él menos cabia alguna responsabilidad; supuesto que no emitió moneda, sino que únicamente partió la legítima de cobre.

La sentencia pronunciada por el ciudadano Juez tercero suplente de Distrito, en la cual consideró: que estaba plenamente probada la emision de moneda de cobre hecha por D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez, y la alteracion de la legítima, verificada por D. José M. Montero: que esos hechos constituian delito, porque importaban usurpacion de atribuciones propias exclusivamente del Poder legislativo de la Nacion: que estas emisiones eran perjudiciales al público, porque se le obligaba muchas veces á comprar efectos de mala calidad; que la ignorancia de una ley penal no exoneraba de responsabilidad á su infractor; y que la escasez de moneda pequeña, no autorizaba al particular á fabricar la que necesitara; pero no hallando malicia en los acusados, creyó que no podian tener aplicacion respecto de ellos los arts. 758 y 671 del Código Penal, y con fundamento del 99 y del 106 del propio Código y de la ley 26 tit. 12 Part. 73, los absolvió del juicio, obligándolos á no emitir monedas en lo futuro, á no alterar las legales y amortizar la que habian fabricado y alterado, entregándola al Director de la Casa de Moneda de esta capital, en cuyo beneficio de dicho establecimiento se aplicaba.

La notificacion de esa sentencia, que no aparece autorizada por el Secretario del

Juzgado, con la cual se conformaron los procesales y sus defensores.

El auto de este Tribunal devolviendo la causa al Juzgado de su origen para que recogiera cuantas monedas fuere posible de las emitidas por D. Miguel Alvarez del Castillo y por D. Refugio Alvarez, para que averiguara en que cantidad se habian hecho esas emisiones y la clase de circulacion que habian tenido, y para que recogieran los instrumentos ó maquinaria de fabricacion.

El auto del Juzgado mandando cumplir el acuerdo del Tribunal; en cuya virtud, ampliada la declaracion de D. Miguel Alvarez del Castillo, dijo que habia fabricado mil cuatrocientas ó mil quinientas fichas, con valor cada una de medio tlaco, las cuales habian circulado y estaban enenando generalmente en esta Ciudad, en muchos pueblos del Estado y aun en otros de fuera de él; que en su comercio no tenia ninguna cantidad de esas fichas, y en cuanto á los instrumentos de su fabricacion que se reducian á un suago, un sello y un martillo, los cuales los entregaria, con excepcion del último que no era de su propiedad; y ampliada tambien la de D. Refugio Alvarez, manifestó: que no podia expresar la cantidad de fichas que habia acuñado, aunque creia que eran pocas, las cuales habian circulado en el barrio de la Plaza de Alcalde, á ignoraba si habian tenido circulacion fuera de esta ciudad; que habia recogido algunas, que formarian un valor de dos ó tres pesos, los que entregaria al Juzgado juntamente con los instrumentos de fabricacion, que eran, un timbre, un fierro para golpear y un martillo.

La entrega que hicieron al Juzgado de Distrito, D. Miguel Alvarez del Castillo, de dos cuños y una pieza de fierro, taladrada por el centro; y D. Refugio Alvarez, de un yunque, un cincel, una pieza con estas iniciales, R. A., y veinte reales en mitades de cuartillas de cobre, tlacos y medios tlacos, y otras monedas de varios Estados, gra-

badas en todas esas piezas estas iniciales: R. A.

El auto del Juzgado de Distrito, dando por cumplido con esas diligencias, el acuerdo de este Tribunal, y mandándole devolver el proceso.

El auto de este Tribunal, en el que por no estar averiguada la clase de circulacion que habian tenido esas monedas, dispuso pedir informe sobre este punto al gobierno del Estado.

Las noticias que hubieron de obtenerse de dicho gobierno, mediante varias y repetidas comunicaciones, que sobre el particular se le dirigieron; por cuyas noticias, con referencia al Administrador principal de la Contribucion de seguridad, al de mercados de esta ciudad y á las autoridades subalternas de este Canton, consta que esas monedas han circulado bastante, dentro y fuera de esta capital.

La fé que dió el Tribunal de las monedas remitidas por el Gobierno del Estado, pertenecientes á la emision de monedas hecha por D. Miguel Alvarez.

El auto de este mismo Tribunal, en el cual por haber tenido noticia de que circulaban monedas con el tipo de las de D. Miguel Alvarez del Castillo, pero de mayores dimensiones de las que se habia dado fé judicial, dispuso suspender el curso de la 2ª instancia, entretanto el Juzgado de Distrito practicara nueva averiguacion sobre si habia habido otra emision.

La fé que dió el Juzgado, de las monedas que se le remitieron del cuño de D. Miguel Alvarez, por la cual consta que unas son mas grandes que otras.

La declaracion del testigo Juan Gonzalez, quien dice haber recibido algunas de las del uno y otro tamaño, en la plaza del mercado de esta Ciudad.

La declaracion de D. Miguel Alvarez del Castillo, en la que manifiesta: que si unas monedas son mas grandes que otras, esto consiste en que están hechas á golpe, y con el golpe el cobre se agranda, y porque fue-

con las primeras que se hicieron, sirviendo como de prueba.

El auto del Juzgado que dió por practicada la averiguacion con esas tres únicas diligencias, y sin méritos, por lo mismo para continuarla.

La respuesta del C. Promotor fiscal, acogiendo el juicio del Juzgado de Distrito y pidiendo se confirmara la sentencia de 1ª instancia.

El auto de este tribunal, en el que para mejor proveer, dispuso que fueran examinados el director de la casa de moneda y algun otro de los empleados principales, bajo los puntos que fueran necesarios, y recordar al Gobierno del Estado, se sirviera dar las noticias que se le habian pedido.

Las declaraciones de los CC. director y grabador de la casa de moneda, quienes contestes dicen: que de las piezas que como maquinaria de amonedacion, se les presentaron, solo tres sirven para ese objeto, y son: dos troqueles, uno de anverso y otro de reverso y un tejuelo; que los demás son útiles para ese uso: que con esas solas tres piezas, no es posible hacer la acuñacion: que en esos troqueles no es posible haber acuñado las monedas chicas y las grandes, porque puestas las últimas sobre ellos, se ve que no engranan, y por último, que no es posible determinar con seguridad la cantidad de monedas que se habian acuñado en esos troqueles; mas por el uso que manifiestan, creen que se acuñarían ciento-cincuenta pesos.

El auto de este Tribunal en que se dispuso para mayor claridad, que se agregaran al proceso un ejemplar de las monedas grandes y otro de las chicas, y son los que aparecen entre las fs. 82 y 83; y por encontrar méritos para continuar el nuevo proceso, devolverlo con ese objeto al Juzgado de Distrito.

El auto de ese Juzgado, censurando el último de este Tribunal y excusándose de conocer el Juez que lo dictó en la nueva averiguacion, porque creyó comprometer su

responsabilidad; pero mandando practicar las diligencias que fueran necesarias, como en efecto practicó las siguientes:

Declaracion del perito fundidor Justo Rivera, el cual dice, que los troqueles y el tejuelo eran suficientes para hacer la acuñacion; pero que en esos troqueles no se podian haber acuñado las monedas grandes y las chicas.

La declaracion conteste con la anterior, del perito fundidor Leonardo Escoto.

La declaracion tambien conteste del perito fundidor Agustin Velasco, quien añadió, que el cordon no puede hacerse á mano, que para hacerlo es indispensable un instrumento á propósito.

La declaracion conteste con la anterior del perito fundidor Pedro Herrera.

El auto del Juzgado de Distrito, en que para mayor claridad dispuso, que en la casa de moneda y en su presencia, se acuñara en los troqueles de D. Miguel Alvarez del Castillo, una moneda grande y otra chica, preparando al efecto las planchas circulares que se ven entre las fs. 86 y 87; cuyas dos monedas sometidas al examen de los fundidores Justo Rivera y Agustin Velasco, grabador Octaviano Ortiz y platero Antonio Quijas, dijeron: el primero y el tercero, que no estaban hechas en una misma matriz, y el segundo y el cuarto, que estaban acuñadas en un mismo troquel.

La declaracion de D. Miguel Alvarez del Castillo, en que dice que no habia recogido ninguna de las moneda que contió: que las acuñó D. Celso Camacho, y á este mismo le encargó que abriera los troqueles.

La declaracion de Camacho, quien dice, que por encargo de D. Miguel Alvarez del Castillo, abrió en su casa los troqueles, lo que hizo por medio de Jesus N., cuyo paradero ignora, y de Felix N., que se halla en Tepic: que acuñó como dos mil quinientas piezas; y por último, que de las monedas que se ven agregadas entre las fs. 82 y 83, la mas grande le parece falsa y la

mas chica la reconoció como de las hechas por su mano.

El careo entre Alvarez y Camacho, por la discordancia en que se haya respecto del motivo por el cual unas monedas son mas grandes que otras; manifestando Camacho, que no es cierto que la diferencia consista en que el cobre se agrande con el golpe, ni por que las mas grandes se hallan hecho primero, sino por la falsedad de estas, en lo que convino D. Miguel Alvarez.

La última respuesta del C. Promotor fiscal, en la que pidió que se estrechara á D. Miguel Alvarez á entregar las monedas que habia acuñado y el instrumento con que se les hizo el cordón, á lo cual no accedió este Tribunal, por haber pasado la oportunidad en que con buen resultado, el Juzgado de Distrito debió haber dictado las providencias necesarias de apremio con tal objeto.

Y por último, el informe á la vista del Sr. Lic. D. J. M. Verea, en el cual, con la lucidez que usa en todos sus alegatos, amplió hábilmente los puntos que se ven agregados en las dos últimas fojas de esta causa.

Considerando: Que la resistencia del juez propietario de Distrito para conocer de este negocio y los esfuerzos de este Tribunal para que la averiguacion se practicara, han motivado diversas especies en el público, por lo que ha sido preciso hacer el anterior extracto del proceso, á fin de que cualquiera persona que vea la presente sentencia, pueda formarse juicio exacto y cierto de la justificacion con que ha procedido este mismo Tribunal.

Que el Ayuntamiento de esta ciudad cumplió uno de sus deberes mas perfectos y preferentes, haciendo al Juzgado de Distrito la denuncia que le hizo, de que D. José M. Montero, D. Refugio Alvarez, D. Prudencio Aviles y D. Miguel Alvarez del Castillo, habian emitido monedas con sello particular, que circulaban en los mercados de esta misma ciudad, remitiéndole seis diversos ejemplares de ellas.

Que el Juez propietario de Distrito, no

pudo ni debió haber despachado este negocio de plano y sin audiencia del Ministerio público, en el sentido que lo hizo, declarando la incompetencia de los Tribunales federales para conocer de él, fundado en los motivos de que se ha hecho relacion; porque algunos de ellos no están justificados en autos y otros son contrarios á esa resolucion.

Que la misma definicion que dan Dominguez y Escribano de la palabra moneda, debió haber obligado al Juez de Distrito á tomar en consideracion la denuncia del Ayuntamiento, porque las monedas emitidas por D. Miguel Alvarez del Castillo, tienen todas las condiciones que exigen esas definiciones, excepto el sello del Soberano, en lo cual consistió el delito que denunció el ayuntamiento.

Que si la definicion de la palabra «moneda» constituye la regla á que debió haberse atendido el Juez de Distrito, para apreciar legalmente, en su verdadero valor y naturaleza, los hechos que se le denunciaban, por las definiciones de esos autores, debia haberse calificado de delito el acto de emitir su particular moneda, con sello privado, y ponerla en circulacion; pues esas definiciones, en su parte esencial, están ajustadas á la ley 8ª, tít. 7º, Part. 7º: *Moneda*, dice, *es cosa con que mercan ó viven los omes en este mundo*; cuya definicion, es indudablemente la que tambien dan los economistas contemporáneos.

Courcelle Senenil, en su Tratado teórico-práctico de economía política, entiendo por esa palabra, la *mercadería por la cual se expresa el valor de las otras, que sirve de medida comun de su valor y que es aceptada en cambio por ellos, sin otra necesidad que la de facilitar los cambios*; y el Sr. Piéto, en sus lecciones elementales de economía política, con otras palabras, la comprende del mismo modo, á su juicio: *Moneda es un valor compuesto que sirve de punto de comparacion á los otros valores*.

Que si el Ayuntamiento de esta Ciudad

aseguró que esas monedas circulaban en los mercados de la misma, y remitió seis piezas diversas, por eso acerto debió comprenderse que el público estimaba esas piezas como la última división de la moneda legal, engañado por la igualdad de ellas y por mostrarles muchas de las condiciones que tiene la moneda usual y legítima, tales como la inalteración, su duración, la facilidad de transporte y el ser hechas de cobre que es el metal del que se han acuñado siempre las cuartillas y octavos de real y del que se acuñan los centavos.

Que la ley citada se hace cargo del caso que un particular acuñó moneda por su cuenta y con sello privado; cuyo hecho prohíbe, califica de falsedad y le señala grave pena.

Que por las doctrinas que enseña y noticias históricas que da el Diccionario de Legislación del Sr. Escribano, anotado por el Sr. Rodríguez de San Miguel, en la palabra "moneda," y el acopio de leyes recopiladas en que funda su doctrina, debe estimarse como delito, el acto de emitir en particular moneda con sello privado; pues la consulta del rey Carlos III, hecha en Cédula de 21 de Octubre de 1767, no es ley, y por lo mismo no pueden por ella quedar derogadas las anteriores vigentes.

Que aun suponiendo cierto que fuera uso general de los particulares emitir monedas con sello privado, autorizado y tolerado ese uso por las autoridades, no podría estimarse como costumbre derogatoria de las leyes que lo contrahían; porque dando ocasión á multitud de fraudes graves al público, y siendo perjudicial al erario, no tenía las condiciones de honestidad é inocencia que exigen las leyes del tít. 2, part. 1ª, para que la costumbre, mediante decisiones judiciales que la favorezcan, sea elevada á rango de ley.

Que sobre este punto no podría haber costumbre, porque importando alteración ó violación de la Constitución Federal, la violación de ella está absolutamente prohibida

por su art. 128, y su alteración ó reforma no puede hacerse sino en los términos que previene el art. 127 de la misma.

Que aun siendo cierto que había costumbre, con todos los caracteres y condiciones que las leyes exigen para que exista, de admitir los particulares, moneda privada para el uso exclusivo de sus comercios, y que esta emisión se haya motivado por la necesidad de proporcionarse cambio, ni D. Miguel Alvarez del Castillo, ni D. Refugio Alvarez, se encuentran en el caso de haber obrado dentro de los límites que marcaría esa costumbre, porque la emisión que hicieron excede muchísimo á las necesidades de su comercio, principalmente respecto del primero, cuya moneda circulaba y siguió circulando con profusión, no solo en esta Ciudad sino fuera de ella, según consta por su propia confesión, por los informes de varias autoridades, por el del recaudador principal de la Contribución de seguridad, por el del de los mercados de esta Capital y por el juicio que se formaron el director y grabador de esta casa moneda, quienes creen, que en los troqueles recogidos deben haberse acuñado ciento cincuenta pesos.

Que si nó consta que la emisión que hizo D. Refugio Alvarez haya sido en tan grande proporción, si está plenamente probado por su propia confesión y por las declaraciones de algunos testigos, que las monedas que emitió circulaban en esta Ciudad.

Que siendo de cobre esas monedas, el delito es de mayor importancia, porque la moneda de esa materia solo la acuña la Nación por su propia cuenta y en cantidad que apenas basta para el pequeño comercio, y por lo mismo, emitiendo el particular monedas de cobre, defrauda al erario, quitándole uno de los recursos con que cuenta para subvenir á las necesidades de la Administración pública, y defrauda á los particulares dándoles monedas que por no tener como el oro y la plata purificados, valor intrínseco, pierden las cantidades que ellas representan.

Que tambien es mayor ese delito cometido emitiendo monedas de cobre que pretendiendo suplir las legítimas de esa materia con algunos artículos de comercio como piezas de jabon, porque cuando se usa de estas, á nadie se engaña; que el mas rudo é ignorante advierte la diferencia que hay entre el jabon y la moneda de cobre, y si recibe la pieza de jabon la recibe por su voluntad, no porque se le engaña.

Que las monedas emitidas por D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez, no habrian circulado si no fuera por la sencillez é ignorancia de la gente pobre, porque á los que se les dieron en cambio no las habrian recibido sabiendo que sobre no ser legales carecian absolutamente de valor.

Que la facultad de emitir moneda ha estado constante y uniformemente reservada al poder público, por las leyes antiguas y por las últimas fundamentales del país: la frac. 19 del art. 131 de la Constitucion política de 1812, entre las facultades que daba á las Cortes, una de ellas era: *Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominacion de las monedas*: la frac. 15 del art. 50 de la Constitucion Federal de 1824, entre otras facultades que daba al poder legislativo, se encuentra la de: *Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominacion de las monedas en todos los Estados de la Federacion*: la fraccion 11 del art. 44 de la 3ª ley Constitucional de 1835, reservaba al poder legislativo la facultad de: *Determinar el peso, ley, tipo y denominacion de las monedas*: la frac. 13 del art. 65 de las Bases de Organización política de la República de 1848, tambien reservaba la misma facultad al poder legislativo de: *Determinar el peso, ley, tipo y denominacion de las monedas*; y por último, nuestra ley fundamental vigente, reserva esa facultad al Congreso en la frac. 23 del art. 72, y de un modo mas expreso, usando de estos conceptos: *Establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener y determinar el valor de la extranjera*.

TOMO VII—PARTE II.

Que este precepto por su antigüedad es sabido por todos, y siendo de mucha importancia, casi no hay publicista que no se ocupe de este punto: el Sr. Castillo Velasco comentando nuestra Constitucion, se expresa así: *Acuñar moneda, significa claramente, dar forma determinada á una sustancia metálica de valor intrínseco y estampar en ella el valor que tiene por la ley*: Laboulaye en sus comentarios á la Constitucion de los Estados Unidos del Norte, hablando de las atribuciones del poder legislativo, dice:

«A este poder comercial se halla unido, como es natural, el de acuñar moneda, el de reglamentar su valor y el de las monedas extranjeras, estableciendo el sistema de pesos y medidas. Acuñar ha sido siempre un atributo de la soberanía, la uniformidad monetaria es cosa de extrema importancia para los pueblos;» y el Sr. Prieto en su obra citada dice: El papel que tiene que representar el Estado, es, ó fabricar moneda ó dar reglas para su fabricacion, sobrevigilándola, y fijar la relacion entre los dos metales circulantes, escogiendo entre ellos el que deba servir de regla oficial;» y contestando á Say, que opina porque esa facultad se cuente entre los derechos del individuo, se expresa así: «Esta práctica por racional que parezca, adolecera de mil inconvenientes. ¡Qué desconfianza en las transacciones! ¡Qué moratorias para pesar moneda por moneda! ¡Qué complicacion en los cambios! Esto seria volver á la infancia de las sociedades. Nada mas conveniente que el que pertenezca al Estado la fabricacion de la moneda.»

Que siendo un delito la emision de moneda de cualquiera materia que sea y cualquiera el valor que represente, hecha por un particular, no cabia como excusa de su emision la ignorancia de la ley que prohíbe á los particulares fabricarla.

Que D. Miguel Alvarez del Castillo, fabricó moneda sabiendo que habia ley que reserva esta atribucion á la autoridad pública.

Que tanto este como D. Refugio Alvarez,

supieron que sus monedas circulaban en los mercados, y aquel supo que la circulacion de las suyas tenia lugar aun en los pueblos de fuera de esta Ciudad, y no obstante esto, el primero nada ha hecho por su parte para impedir la circulacion recogiendo las monedas que emitió y entregándolas á la autoridad para que las inutilice.

Que no hay hecho alguno, ni indicio de ningún género, que hagan creer que procedieron con inocencia y buena fé, al hacer la emision de esas monedas, sino que por el contrario, en D. Miguel Alvarez del Castillo, se nota falta de recta intencion y propósito de eludir la ley, sobreponiéndose á su precepto, segun estos datos. Ya determinado en 1ª instancia este proceso, cuya sentencia declaró ser delito la emision de moneda hecha por particulares, todavía circulaban las de su cuño en esta ciudad y en varios pueblos: así lo confiesa en su declaracion de 5 de Marzo de este año, visible á fs. 69: en su alegato de expresion de agravios de 11 de Setiembre del año próximo pasado, dijo que ya habia recogido las monedas que emitió, y en la declaracion de que se acaba de hacer mérito, y en otras posteriores, manifiesta no tener ningunas en su poder, y esto, cuando por las preguntas que sobre este punto le hacia el Juzgado, debía entender que estaba obligado á recogerlas y entregarlas: la discordancia en que se halla con el fabricante de esas monedas, Celso Camacho, diciendo aquel que se acuñaron mil quinientas piezas, y éste dos mil quinientas, pues no es creible que quien las mandó hacer no sepa el número que le hicieron, y esto bajo la hipótesis de que sea digno de crédito el dicho de Camacho: el haber aparecido otra moneda de mayores dimensiones, que segun el juicio de peritos no pudo haber sido acuñada en los mismos troqueles que las otras; moneda reconocida por él mismo, en su declaracion de fs. 78 vta., como una de las que emitió; cuyo reconocimiento hizo con perfecto y deliberado conocimiento; pues dijo que, si unas mone-

das eran mas grandes que otras, esto provenia de que fueron hechas á golpe, y el cobre se agianda con los golpes, y porque son las que se acuñaron primero, como para servir de prueba, lo que demuestra que recibió esas monedas, que las tuvo en su comercio y que las puso en circulacion; porque aunque el fabricante de ellas, Celso Camacho, dice á fs. 89, que las monedas grandes son falsas, esto no es creible, ya por haberlas reconocido como suyas el interesado, ó bien por la falta de verdad con que se produjo Camacho, diciendo que solo habia acuñado dos mil quinientas piezas, lo cual está impugnado con los informes de los empleados y autoridades de que se ha hecho mérito, por los cuales consta, que en esta ciudad y fuera de ella ha habido grande circulacion de esas monedas, que no podria haber con solo dos mil quinientas piezas: la existencia de piezas mayores que no pudieron haber sido hechas en los troqueles que se han recogido, segun el juicio del director y grabador de la Casa moneda, en el reconocimiento material que hicieron, poniendo unas y otras monedas sobre esos troqueles, y en el de los peritos fundidores Justo Rivera, Leonardo Escoto, Agustin Velasco y Pedro Herrera, cuya opinion no puede estimarse impugnada, por la acuñacion que el Juzgado mandó que se hiciera en su presencia de dos monedas, una grande y otra chica, y son las que se ven entre las fs. 86 y 87, porque la diferencia en las dimensiones de esas piezas no está en su cuño, sino en el círculo cortado con útiles ó instrumentos diferentes, propios de la Casa moneda; lo cual aparece con tanta claridad, que el fundidor Agustin Velasco y el platero Ambrosio Quijas, á la simple vista dijeron, que estaban acuñadas en unos mismos troqueles; y por último, es una demostracion de la falta de recta intencion con que obró, su resistencia á presentar todos los útiles ó instrumentos con los que hizo la acuñacion.

Que si no se acordó por este Tribunal,

que el Juzgado de Distrito prosiguiera y resolviera la averiguación sobre emisión de las monedas mayores, fué porque comprendió que en el estado que se encontraba el proceso y por el tiempo, que había trascurrido, no sería posible aclarar la verdad con la perfección que mandan las leyes.

Que la sentencia de primera instancia declaró ser delito la emisión de moneda hecha por particulares, y que con esa sentencia se conformaron D. Miguel Alvarez del Castillo, D. Refugio Alvarez y sus defensores; no solo no oponiendo ningún recurso, porque ninguno tenían que oponer, supuesto que esa declaratoria no se hizo en la parte resolutive; sino guardando absoluto silencio en la notificación que de ello se les hizo, en sus respuestas y alegatos posteriores.

Que respecto de D. Refugio Alvarez, concurrió una circunstancia atenuante de primera clase, por la que debe moderársele la pena, y es la marcada en la fracción 1ª del art. 39 del Código penal.

Que en D. Miguel Alvarez del Castillo concurre la misma circunstancia atenuante; pero destruida por dos agravantes de segunda clase, y son las marcadas en las fracciones 11ª y 12ª del art. 45 del propio Código, las cuales, pesando más que aquellas, hacen que sea mayor la pena que se les imponga.

Que siendo muy explícito y expreso el Código penal al hablar del delito de falsificación de moneda, no existe este delito, sino cuando se han procurado imitar los sellos ó cuños de la Nación, de tal modo, que se pretenda que se confundan los falsos con los legítimos; y como D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez no intentaron hacer esto; porque las monedas que acuñaron tienen sello particular, no se les pueden aplicar las disposiciones del cap. 1º, tít. 4º lib. 3º del Código penal; sino las del cap. 10º del propio título y libro, porque el acto de imitar monedas con sello particular y ponerlas en circulación, solo importa usur-

pación de las atribuciones propias y exclusivas del Poder Legislativo.

Que aunque está plenamente probado que D. José M. Montero, alteró la moneda legítima de cobre; pero como no hizo esto con objeto de cercenarla y disminuir la cantidad de metal que contiene, y por otra parte el Código criminal al prohibir y castigar la cercenación ó alteración de la moneda, solo habla de la de oro ó de plata; no puede por esto calificarse de delito el hecho por el que se ha procesado á Montero, y por lo mismo tampoco se le puede imponer pena.

Que en la práctica de la averiguación, se notan estas faltas: resistencia á practicarla: duración inmotivada del proceso: haber acumulado en un solo proceso varias averiguaciones, que no tienen más punto de contacto que la naturaleza é identidad del delito: no haberse calificado la excusa del C. Juez propietario, para poder continuar conociendo el suplente respectivo: haberse admitido la apelación del auto de prisión en ambos efectos, y mandar en auto pronunciado después, que continuará la práctica de la averiguación; y por último, no estar autorizadas por el Secretario del Juzgado, las notificaciones de la sentencia definitiva.

Por lo expuesto y con fundamento de los arts. 9, 66, 106, 168, 218 y 758 del Código criminal y ley 26, tít. 1º, part. 7ª, se resuelve:

1ª Se revoca la sentencia de 22 de Febrero del presente año, pronunciada en este Juzgado de Distrito en la parte que absuelve del juicio por emisión de moneda de cobre, á D. Miguel Alvarez del Castillo y á D. Refugio Alvarez.

2ª Por emisión de moneda de cobre, que ha circulado en esta ciudad y en varios pueblos de fuera, lo que importa usurpación de una de las atribuciones propias y exclusivas del Poder Legislativo de la Federación, se condona á D. Miguel Alvarez del Castillo á nueve meses de arresto y multa de cuatrocientos pesos.

3ª Por el propio delito se condena á D. Refugio Alvarez á seis meses de arresto y multa de cien pesos.

4ª Se Absuelve á D. José M. Montero, del juicio que contra él se ha seguido por alteracion de moneda legítima de cobre.

5ª Se aplican en beneficio de esta Casa Moneda, inutilizándose previamente, las monedas recogidas, las que se recojan en lo sucesivo y los útiles de fabricacion.

6ª Amonéstese á D. Miguel Alvarez del Castillo y á D. Refugio Alvarez privadamente, pero con la formalidad que previene el art. 218 del Código criminal.

7ª Cuando la Suprema Corte devuelva este proceso, compúlsese testimonio de las faltas marcadas que afectan al segundo suplente para que obre en el proceso que contra él se practica; y pásese original esta causa al C. Promotor, para que promueva lo que fuere de justicia respecto de los demás funcionarios á quienes afectan las otras faltas; y devuelta por el C. Promotor fiscal, remítase al Juzgado de Distrito para que prosiga contra Celso Camacho, Jesus N., Felipe N. y demás que resulten complicados en este delito.

8ª Líbrese Orden al gobierno del Estado para que dicte las de su resorte, á fin de que las autoridades y agentes á quien corresponda, procedan á recoger las monedas que circulan emitidas por D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez.

9ª Se apercibe al Srío. del Juzgado de Distrito, por haber dejado sin autorizar las notificaciones de la sentencia definitiva de 22 de Febrero.

10ª En caso de conformidad ejecútese.

11ª Dése cuenta con esta causa á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y remítase copia de esta sentencia, de la de primera instancia y del pedimento fiscal, al Semanario Judicial.—*Juan Robles Martinez.*—*Tomás Bravo*, secretario.

Es copia que certifico. Guadalajara, Agosto 28 de 1874.—*Tomás Bravo*, secretario.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte.

El Fiscal dice: Que esta causa se formó en el Juzgado 3º suplente de Distrito del Estado de Jalisco, contra Refugio Alvarez y Miguel Alvarez del Castillo, por haber circulado unas fichas ó medallas de cobre, haciéndolas aparecer como monedas, esto es, valiéndose de ellas en las operaciones de cambio del comercio á que están dedicadas en dicho Estado; y contra José María Montero, por haber partido las monedas conocidas antiguamente con el nombre de tlacos, y sirviéndose de las partes divididas, por medio de la circulacion.

Únicamente de los dos primeros reos tiene que ocuparse el que suscribe, pues en cuanto al último, la sentencia del Tribunal de Circuito ha causado ejecutoria, por haber confirmado la de 1ª instancia que absolvió del cargo al acusado (ley de 17 de Enero de 1853, art. 56.)

Cree por demás el fiscal, hacer una reseña de las diligencias que se refieren á Alvarez y Alvarez del Castillo, porque ellas se encuentran minuciosamente detalladas en el resumen de los hechos que procede á la parte jurídica de la sentencia de 2ª instancia. Así es, que solo se ocupará de aquellos puntos, en los que, segun su parecer, se ha incurrido en esa sentencia, en algunas equivocaciones de derecho, que es de suma importancia rectificar, por la influencia decisiva que en la exacta aplicacion de las leyes penales, tiene la manera de clasificar ó considerar los hechos criminosos.

El opina con los ciudadanos Promotor, Juez tercero suplente de Distrito y Magistrado de Circuito del Estado de Jalisco, que en el caso se ha cometido el delito que en el cap. 10, tít. 4º, Lib. 3º del Código penal, se encuentra comprendido bajo la denominacion de «usurpacion de funciones públicas»; pero difiere en opinion, en el modo de reputar esa usurpacion, es decir, juzga que al emitir los encausados como mo-

neda, unas planchuelas de cobre con signo ó sello particular, han usurpado las funciones de la autoridad pública; pero no cree que la función usurpada, sea la que al poder Legislativo encomienda la frac. 23 del art. 72 de la Constitución federal, sino la que el Ejecutivo tiene para intervenir éisolo y solo él, en todo lo relativo á la fabricación de la moneda, y á su circulación. Pocas palabras se necesitan para hacer comprender la idea de la Fiscalía.

El art. 72 del Código fundamental, en su fracción citada, se expresa así:

«El Congreso tiene facultad: para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta debe tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema de pesos y medidas.»

La facultad, pues, del Congreso, se extiende, respecto de la moneda, á las tres cosas á que alude dicha prevención, y esa facultad, no de otro modo puede ponerse en ejercicio, según el art. 64 también constitucional, que por medio de una ley ó acuerdo económico, estableciendo casas de moneda, determinando el tipo y demás condiciones de ésta, y el valor de la extranjera. De manera, que un particular ó un cuerpo político, por ejemplo, la Legislatura de un Estado, usurparia las funciones del Legislativo en materia de moneda, siempre que se propusiera ejercerlas por medio de una pretendida ley ó de un acuerdo económico; por la sencilla razón, de que para ponerse en ejercicio por el único que las tiene á su cargo, el Congreso requiere una forma determinada, una ley ó un acuerdo económico, sin lo cual, el mismo poder Legislativo no podría hacer uso de ellas.

Un ejemplo aclarará más lo que dice el Fiscal: el Procurador general de la Nación tiene ciertas atribuciones principales, de las que hace uso, dirigiéndose oficialmente á las autoridades supremas, ó por medio de pedimentos formulados en los expedientes que al efecto se le pasan, ó por medio de comunicaciones.

Ahora bien, la usurpación de esas fun-

ciones por un particular, no la cometería el que, pretendiendo ejercerla, formulara privadamente y sin ninguna solemnidad, una petición ante la Corte, ó el que de otra manera no oficial, se dirigiera á esta ó al Ejecutivo. Estos actos serían tomados como resultado de un trastorno mental; pero nunca como un delito de usurpación de funciones públicas. Para que este exista, es necesario que sin derecho se haga uso de las facultades reservadas á la autoridad, valiéndose de los mismos medios que se acostumbra en el ejercicio legal de ellas.

Si nuestro Código penal no fuera bien terminante en el respecto, que sí lo es, podrían verse otros en los que con perfecta claridad se emite la misma idea. La ley 2ª, tit. 7º, part. 7ª, dice: «Eso mismo sería el que anduviese e en *talle de Canallería*, ó non lo fuass; ó el que cantasse Missa, non auuiendo órdens de Presb.» El Código español, en el art. 251, se expresa así: «El que se fingiere autoridad, empleado público ó profesor de una facultad que requiera título y ejerciere actos propios de la profesión ó cargo, será castigado, etc.» El francés, (art. 258) dispone «que el que sin título legítimo se mezclare en el desempeño de las funciones públicas civiles ó militares, ó ejerciere algunos de sus actos, será castigado, etc.» El de Napoleon, (art. 164) «que el que sin título legítimo se mezclare en el ejercicio de las funciones públicas civiles ó militares, será castigado, etc.»

Como se vé, el titularse empleado público y ejercer actos reservados á la autoridad, ó mezclarse en el ejercicio legal de las funciones de ésta, esto es, dictando medidas que ella sola puede dictar, haciéndolo en la misma forma que legalmente se acostumbra, en eso consiste, para la universalidad de las leyes y Códigos extranjeros, la usurpación de funciones públicas. «El que sin ser funcionario público ejerza alguna de las funciones de tal, dice el art. 758 del Código penal vigente, en la Federación, sufrirá, etc.»

Además, nuestro sistema de gobierno, autoriza para decir: que la facultad del Legislativo, no es intervenir en lo material del establecimiento de las casas de moneda, y en la ejecución de las disposiciones que fijan las condiciones que ésta deba tener y determinen el valor de la extranjera, sino la de expedir leyes sobre alguna de esas tres cosas. Así es, lo repito, que la usurpación de tal facultad, no consiste en establecer casas de moneda, hacer ésta de tipo distinto ó darle un valor á la extranjera diverso del fijado legalmente; sino en expedir una ley que se ocupe de alguno de los puntos que forman la materia de la fracción 23 del art. 72 de la Constitución.

El fiscal no debe detenerse mas sobre esto, porque el recargo del trabajo no se lo permite y porque á su modo de ver, lo dicho es bastante para demostrar, que Alvarez y Alvarez del Castillo, no han usurpado las atribuciones del Congreso en la ejecución del hecho que motiva este proceso.

Las que han pretendido ejercer son, como se dijo al principio, las que el Ejecutivo de la Union tiene, para entender en todo lo concerniente á la fabricacion de la moneda, ó sea de toda sustancia metálica que representa un valor determinado, y que en los cambios sirve de punto de comparacion á los otros valores.

Esas atribuciones no pueden ponerse en duda que corresponden al poder Ejecutivo. En todos los paises, aunque por distintas causas, atributo de la soberanía se ha considerado siempre la acuñacion de la moneda. En unos la intervencion puramente moral ó sea dispositiva ó legal, y la material ó sea la que se relaciona con la administracion de las casas de moneda y con la fabricacion y circulacion de la misma, se encuentran reunidas en una sola persona como en las monarquías absolutas, en las que bajo el cuidado y sobrevigilancia del Rey se fabrica la moneda y con su nombre se dan leyes que fijan un tipo y condiciones. En otras naciones, como sucede en la nuestra,

lo primero toca al poder Ejecutivo, y lo segundo corresponde al Legislativo. Incansable tarea sería la de enumerar siquiera las leyes todas que con sus preceptos confirman la verdad de lo que dice el Fiscal. El derecho romano, leyes 8 y 9, tít. 10. Lib. 48 del Digesto y 1º y 2º, tít. 14, Lib. 9 del Código; los Códigos franceses, prusiano, español moderno y otros varios: las leyes regnicolas: ley 2ª, tít. 6º, Lib. 7º, F. P., ley 7ª, tít. 12, Lib. 4º F. R.; ley 1ª, tít. 2º, 9 y 10, tít. 7º, Par. 7ª, ley 4ª, tít. 8º, Lib. 72, N. R., y además todas las que sobre moneda y casas de moneda, se encuentran en la historia de la Real Hacienda, (páginas de la 109 á la 284): las leyes patijas expedidas desde el año de 1821 hasta nuestros dias, pueden verse citadas en el tomo segundo de la obra de Brito, titulada: «Índice de las leyes, decretos, reglamentos y circulares,» bajo las palabras moneda y monederos, y en el nuevo Código de la Reforma, del Lic. Gutierrez, página 204 de la segunda parte del tomo segundo: todas estas leyes y códigos y disposiciones, castigando las unas á los que fabrican moneda falsa ó adulteran la verdadera; determinando el tipo, ley y demas condiciones de esta las otras, y dando reglas, las demas, para la administracion de las casas de moneda y para la circulacion y amortizacion de la misma, demuestran claramente que la moneda, en cuanto á su fabricacion, está y ha estado fuera de la accion de los particulares, y que se encuentra y ha encontrado, tanto en lo legislativo como en lo administrativo, sujeta al poder de los Gobiernos, del Rey en ambas cosas, como en las monarquías absolutas; del Ejecutivo en lo segundo y del Legislativo en lo primero, como en las Repúblicas.

Sobrada razon tuvieron los Sres. Fonseca y Urrutia, al decir en la página 109 del tomo primero de la «Historia Real de Hacienda» lo siguiente: «Siendo el derecho de sellar moneda, como el de crear Superiores Magistrados, establecer leyes y otras seme-

jantes, tan adherentes á la Suprema Potes-tad del Soberano; que como han opinado uniformemente los sábios de todas las na-ciones y declaran en términos específicos diversas leyes de partida (la 4ª tít. 16, Pª 2ª; la 9ª tít. 4º Pª 5ª y otras,) no pueden los monarcas supremos, enagenar ni des-prenderse perpétuamente de obtenerlos, por-que seria esto destruir una de las bases fun-damentales de la constitucion de los reinos, y dividir y segregar el señorío de ellos con-tra su esencial constitucion: justísimamente se reservaron nuestros soberanos católicos el *derecho privativo de sellar y acuñar las monedas de que deberian los hombres usar en sus comercios y giros*, y de prohibir que esta dejase de admitirse y correr por los valores que les designaban en todos los ter-ritorios de sus inmediatos dominios.....»

Y hubo razon para asentar la anterior doctrina, porque además de que la conve-niencia pública la abona, las leyes y dispo-siciones antiguas que quedan mencionadas la fundan claramente y sin ningun género de duda, sobre todo la ley 9, tít. 7º, part. 7ª «Moneda es cosa con que mercan, ó ben-den los homcs en este mundo. *El por ende non ha poderío de la mandar fazer algun ome, si non Emperador ó Rey, ó aquellos á quien ellos otorgan poder que la fagan por su mandado; é cualquiera otro que se trabaja de la fazer, face muy gran falsedad, é gran atreuimiento, en querer tomar el po-derío, que los Emperadores ó los Reyes to-maron para sí señaladamente.*»

En cuanto al derecho moderno, si no fue-sen bastantes las leyes que se citan en las colecciones de Brito y Gutierrez, existen la frag. 23 del art. 72 de la Constitucion y el decreto de 23 de Febrero de 1861, da-do por el Presidente Juarez en uso de fa-cultades extraordinarias, mandado obser-var por el Congreso en 12 de Julio del mis-mo año, y considerado en vigor por las leyes de 20 de Julio y 29 de Noviembre de 1867, que encarga á los Ministros de Fomento y de Hacienda (art. 1º fracciones

4ª y 5ª,) las casas de moneda y el ramo de minería; y por último, hay tambien la cir-cular de 9 de Setiembre de 1868, que man-da observar en la fabricacion de la moneda, las ordenanzas del ramo de 1º de Agosto de 1750 (se encuentran en la «Historia de la Real Hacienda,») que dan una interven-cion esclusiva al Poder Supremo en lo rela-tivo á la misma fabricacion.

Al Poder Legislativo, ordena el artículo constitucional, se ha dicho ya, pero bueno es repetirlo, corresponde dictar leyes esta-bleciendo casas de moneda, determinando las condiciones de ésta y el valor de la ex-trangera; al Ejecutivo toca, previenen las disposiciones ya poco citadas, la administra-cion de las casas de moneda, y lo concer-niente á la amonedacion y circulacion de to-do metal amonedado.

Colocado en este terreno, el Fiscal es de parecer que se confirme en todas sus par-tes la sentencia del Tribunal de Circuito, sin mas modificacion que la de en vez de considerar el delito de que se trata y por el que se pena á Miguel Alvarez del Casti-lio y á Refugio Alvarez, como usurpacion de funciones del Congreso General, se re-pute como usurpacion sí, pero de las facul-tades del Ejecutivo de la Union.

Cumple al deber del Fiscal manifestar que en esta causa hay otro delito, del que podria hacerse cargo á los acusados, junta-mente con el de usurpacion de funciones públicas, segun el art. 763 del Código pe-nal; pero no lo hace el que suscribe, por-que el delito á que se refiere, es el que se encuentra definido en el art. 413 del mis-mo Código con el nombre de fraude; y no tiene conciencia para asegurar, por falta de pruebas plenísimas, que por parte de los reos hubiese engaño al emitir la moneda, ó error por parte de los que la recibieron, creyéndola legítima no siéndolo; requisitos indispensables para la existencia de aquel delito.

Al decir el Fiscal que en su concepto es de confirmarse, con la sola modificacion in-

dienda, la sentencia del Tribunal de Circuito, lo ha hecho, y lo advierte para evitar dudas, en el sentido de que esa confirmación abraza todos los puntos de la parte resolutive de la misma sentencia, excepto solamente el que habla del Sr. Montero, por encontrarse fuera de la jurisdicción de esta Corte, porque según parece, tanto en lo que hace relación á los encausados, como en lo que mira al Juez 2º de Distrito y Secretario del mismo, es enteramente arreglado á derecho.

Por lo expuesto, y teniendo presente en cuanto á la aplicación de la pena, cuando hubiere circunstancias atenuantes y agravantes, el art. 231 del Código penal, el Fiscal concluye pidiendo:

1º Que por el hecho de emitir moneda de cobre en la ciudad de Guadalajara y en varios pueblos foráneos, con circunstancias atentantes y agravantes, lo que importa usurpación de funciones del Poder Ejecutivo de la Unión, se confirme la sentencia del Tribunal de Circuito del Estado de Jalisco, que impuso á los acusados Miguel Alvarez del Castillo y Refugio Alvarez, la pena de nueve meses de arresto y 400 ps. de multa al primero, y de seis meses de arresto y 100 pesos de multa al segundo.

2º Que por estar arreglados á derecho, se confirman también los puntos 5º, 6º, 7º, 8º y 6º de la parte resolutive de la dicha sentencia.

3º Que de conformidad con lo prevenido en el art. 762 del Código penal, se publique el fallo de esta Sala, si fuere condenatorio, en el *Diario Oficial* del Gobierno general, y en el Estado de Jalisco.

El Fiscal somete estas peticiones á la ilustración de la Corte, y se toma la libertad de recomendarle todo el estudio y dedicación que demandan un proceso de la gravedad del presente, porque la sentencia de este Tribunal fijará la jurisprudencia sobre abusos que insensiblemente van arraigándose en nuestra sociedad, perjudicándola en sumo grado.

México, Diciembre 10 de 1874.—Lozano.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 4 de 1875.

Vista la causa instruida ante el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco, contra los comerciantes D. Miguel Alvarez del Castillo, D. Refugio Alvarez Tostado y D. José M. Montero, por fabricación y emisión de moneda falsa; cuya causa se les formó á solicitud del Ayuntamiento de Guadalajara. Vista la escusa del Juez de Distrito propietario para conocer de esta causa, por haber expresado su opinión de no ser delito el que se atribuía á los acusados; las comunicaciones del Ejecutivo de la Unión y del Estado, previniendo al Juez por conducto del Tribunal de Circuito, procediese á formar la averiguación respectiva. Visto el pedimento del C. Promotor fiscal, la sentencia que pronunció el Juez 3º suplente de Distrito, en 22 de Febrero del año próximo pasado, absolviendo á los acusados del delito referido, así como el de usurpación de facultades del poder público: la sentencia que en revisión pronunció el Magistrado de Circuito de Guadalajara en 3 de Agosto próximo pasado, revocando la del inferior y condenando á D. Miguel Alvarez del Castillo á nueve meses de arresto y al pago de 400 pesos de multa, y á D. Refugio Alvarez Tostado á seis meses de arresto y 100 pesos de multa; y absolviendo á D. José María Montero, por considerar que la emisión porque se juzgó á los tres y condenó á los dos primeros, importa una usurpación de las facultades del Poder Legislativo de la República. Visto el parecer del C. Procurador general y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: Que todas las apreciaciones hechas en esta causa en contra de los acusados, proceden de la falsa base de con-

siderar como moneda las fichas ó planchuelas que emitieron.

Que esa base es falsa, porque tales fichas ó planchuelas, por ningún motivo pueden considerarse como moneda, puesto que carecen para serlo, de todos los requisitos que constituyen á la que lo es realmente, según la significación gramatical de la palabra, la definición unánime que de ella se dá en jurisprudencia y en economía política, y las prescripciones establecidas sobre esa materia en las leyes de la República.

Que los acusados, no solamente no han usurpado, sino que ni siquiera han podido usurpar, las facultades Legislativas que concedió al Congreso de la Unión, la fracción XXIII, del art. 72 del Código de 1857, consistentes en establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, y determinar el valor de la extranjera.

Que tampoco han usurpado, ni podido usurpar, las facultades administrativas que, respecto de ese ramo, incumben al Ejecutivo de la Unión, consistentes en cuidar de que la fabricación de la moneda se ajuste á las condiciones fijadas por el Congreso.

Que en el caso de deber estimarse como monedas las planchuelas emitidas por los acusados, el delito de estos sería entonces no el de una supuesta usurpación de facultades públicas, sino el de fabricantes de moneda ilegal y contrahecha, y la pena que debiera aplicárseles, la designada en las leyes para los monederos falsos.

Que tampoco es debido considerar las planchuelas como moneda falsa, por no ser moneda, sino unos simples signos convencionales de crédito, aceptables únicamente por los que quieran admitirlos y que ninguno está obligado á recibir.

Que aun en el evento de que los acusados ejercieran alguna coacción ó violencia en determinadas personas para la admisión de las planchuelas, este acto no podría tener otro carácter que el de un fraude cometido contra la propiedad.

TOMO VII—PARTE II.

Que ya se estimase ese fraude como una falta para cuya represión bastara la imposición de una pena correccional, ó ya como un verdadero delito, que requiriese formación de causa y el pronunciamiento de la sentencia respectiva por la autoridad judicial, una ó otra cosa sería de la exclusiva competencia de las autoridades locales, y en ningún sentido del resorte de los tribunales de la Federación.

Por estas consideraciones y fundamentos, es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Guadalajara, declarándose:

1º Que los Sres. D. Miguel Alvarez del Castillo y D. Refugio Alvarez Testado, no han usurpado las facultades del Congreso, ni del Ejecutivo de la Unión; que tampoco han fabricado moneda falsa, y que el acto de haber emitido y circulado planchuelas con su sello particular, no es de la incumbencia de los Tribunales federales.

2º Se da por revisada la sentencia referida del Tribunal de Circuito, en la parte relativa al C. Montero.

Devuélvase las actuaciones al Tribunal de Circuito, de que preceden, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Marzo 12 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario!